

La última Independencia en América del Sur: Perú y el ejército realista 1816-1826

POR **CRISTINA ANA MAZZEO** (*)

La guerra es un juego donde se aventura más o menos la pasión de los jugadores, que tan pronto se gana tan pronto se pierde y cuando se gana mucho sucede comúnmente que, el que gana continúa jugando para aumentar su bien, o que el que pierde no quiere dejar el juego porque espera volver a ganar lo que ha perdido, y al fin la fortuna se vuelve, y el que ganaba no solo pierde lo que había ganado sino también lo que tenía cuando se puso a jugar.

José de la Serna (1821) (1).

En estos términos explicaba José de la Serna al Ayuntamiento de Lima las desventajas de la guerra en el Perú, cuando este le hacía el cargo de no cumplir con la Constitución de 1812 impuesta nuevamente a partir del trienio liberal. De ellas se desprende el concepto fortuito del acontecimiento de la batalla y de la incertidumbre, más allá de la planificación y la estrategia aplicada. Coincide también con la idea de K. Von Clausewitz (2002) quien dice: "(...) ninguna actividad humana guarda una relación más universal y constante con el azar como la guerra". Sin embargo, si la guerra es un juego, esta se desarrolla también en el plano de lo político, dado que la guerra es la continuación de la política pero por otros medios (2). Y en este sentido, la guerra en América reflejó la desestructuración política que vivió España desde 1812 y, posteriormente, con el período liberal de 1820-1823. Sin embargo, si la guerra es un juego, también se desarrolla en el plano de lo político, por lo que debió existir una vinculación más estrecha entre la decisión política y la acción militar. En cambio, las desavenencias en el seno del ejército en América, que se evidenció en la falta de disciplina, mostró la incongruencia entre el pensamiento político y el accionar militar.

(*) Doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Prof. en la Especialidad de Historia de América Latina, Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Instituto Riva Agüero del Perú y miembro de la Asociación peruana de Historia Económica del Perú.

(1) De la Serna, José (1821). *Carta enviada al ayuntamiento de Lima*. Archivo General Militar de Madrid (IHCM). Lima, 8 de junio.

(2) El trabajo clásico sobre esta aportación es el de K. V. Clausewitz (2002) tomado también por Blanco Valdez (1988).

Desde 1812 con la implementación de la Constitución de Cádiz, pasando luego por la restauración monárquica en 1814 y volviendo a la restitución del liberalismo en 1820, España fue y vino entre una ideología y una práctica totalmente contrapuesta. No hubo unidad de acción, por el contrario los militares españoles en el Perú jugaron su propio juego más allá de las disposiciones o posturas políticas como la historiografía ha planteado, no fue una lucha entre liberales y absolutistas, sino que actuaron según sus propias intenciones e intereses personales.

Este trabajo se enmarca en la nueva historia militar que ha abierto nuevos enfoques de análisis al abordar la composición social del ejército, el reclutamiento y la instrucción militar entre otros temas (Bodeguero, 1994: 147-171). Dentro de este concepto podríamos incluir los conflictos existentes en la cúpula del ejército y los efectos que dichos conflictos han tenido en la desarticulación de las fuerzas realistas como uno de los síntomas que evidencian la falta de unidad necesaria para la toma de mando y conducción de la guerra. La guerra fue, como lo ha dicho ya Clausewitz, no solo un enfrentamiento entre ejércitos sino la continuidad de la política.

El objetivo es, entonces, analizar los últimos diez años de guerra en los que actuaron tres militares españoles, de los cuales dos de ellos fueron los últimos virreyes, Pezuela y La Serna, cuyos conflictos socavaron el poder militar y dieron como resultado la consolidación de la independencia. Veremos además un tema poco comentado en la historiografía independentista que es el concepto de la “desobediencia debida” aplicada en la Constitución de Cádiz de 1812 y reinstalada en el trienio liberal español en 1820. Consideramos que la Constitución, más que lograr aglutinar a las fuerzas militares y aportar un espíritu nacionalista como pretendía, terminó por desarticular el ejército español, situación que fue muy bien aprovechada por el ejército independentista. Nos referimos a dos acontecimientos puntuales, la rebelión de Aznapuquio, primer golpe militar en el seno del ejército, en 1821, y la rebelión de Pedro A. Olañeta en 1825 contra el virrey interino general La Serna, rebelión que fue bien recibida por Bolívar porque la consideraba a favor de los intereses de los independentistas.

El general La Serna fue uno de los militares que habiendo participado en la guerra contra los franceses llegó al Perú en 1815 para tomar la conducción de las fuerzas realistas en el altiplano. Dicho cargo había sido dejado por el general Joaquín de la Pezuela, quien a su vez había sido nombrado virrey del Perú en reemplazo de Abascal. Mientras que Pedro Antonio de Olañeta fue el último general que dirigió las fuerzas armadas del Alto Perú, cuya rebelión desestabilizó la capacidad de acción del ejército frente a las fuerzas independentistas.

Ambos levantamientos militares se dieron en el marco de una de las modificaciones más importantes realizadas por las Cortes del Trienio liberal, cuando se crearon las bases para la formación de un ejército constitucional, cuya organización interna reflejó los nuevos valores y principios del liberalismo y la posterior restauración de la monarquía absoluta en 1824 con el regreso de Fernando VII al poder. En ese lapso en América y particularmente en el Perú hubo, por un lado, intentos de conciliación entre españoles y patriotas mediante negociaciones llevadas a cabo en Miraflores y Punchauca entre los comisionados enviados por el general San Martín y los representantes de los dos últimos virreyes, Pezuela y La Serna. En cuanto a los dos levantamientos militares, estos fueron el reflejo de las contradicciones de los liberales respecto a la nueva conformación del ejército incluida en la Constitución. En 1821 una comisión presentó a las Cortes, una propuesta de ley que modificaba las bases del servicio militar. De esta manera, la ciega obediencia a las órdenes superiores, que constituía el principio rector de la política castrense en las monarquías absolutas, fue reemplazada por el principio de “desobediencia a las órdenes” de cualquier autoridad que se aplicaría en aquellos casos que se atentara contra el poder de representación de la nación. El proyecto de ley fue aprobado en abril de 1821, y contenía en su articulado el principio del texto primigenio de los diputados doceañistas. (Blanco Valdés, 1988: 378).

El artículo 6° del nuevo proyecto militar constitucional establecía que los únicos casos en que “la ley autorizaba y prescribía como un deber la desobediencia del militar a sus jefes” y que podrían ser considerados delitos de alta traición eran: “ofender la persona sagrada del rey, impedir la libre elección de diputados a Cortes e impedir su reunión, disolver las cortes o la diputación permanente de las mismas” (Blanco Valdés, 1988: 386-387).

Si bien la concepción de este principio tenía como objetivo principal la defensa de la Constitución y del nuevo sistema de gobierno representativo, en América, muchos generales hicieron uso de ese concepto para justificar sus levantamientos ya no en defensa de la Constitución pero sí en defensa de sus propios intereses. Para establecer las causas a las que respondieron los dos levantamientos que se dieron en el Perú en 1821 y 1824, vamos a analizar la acción de cada uno de estos personajes en el Perú, ver a qué respondieron estas dos disidencias en el ejército y si hubo influencia de la nueva Constitución militar. La Constitución en sí fue ambigua porque bregaba por un gobierno constitucional y liberal pero, por otro lado, limitaba la representatividad en las cortes de los americanos que se incorporaron quienes no fueron elegidos en relación a las poblaciones que representaban. La idea de que los soldados debían ser ciudadanos antes que militares tampoco era factible en América donde el reclutamiento se hacía donde podían y los indígenas no gozaban de dicha condición. Como sostiene Fontana, la Constitución fue más

bien reformista, dado que muchas estructuras del antiguo régimen solo cambiaron de nombre (Fontana, 1983: 16) (3).

Para el desarrollo del trabajo, tomaremos en consideración, por un lado, el manifiesto de Pezuela, documentación privada de dicho general (4), la memoria militar del mismo, el documento escrito por el Arcediano de Chile Dn. Mariano Ruiz Navamuel (IHCM dto. 5591.25) que describe los hechos acaecidos en ese momento, y los partes relativos a la campaña del Perú desde el 29 de enero de 1821, fecha en que tomó posesión el general La Serna hasta fin de marzo de 1824. Analizaremos además los últimos trabajos publicados sobre el general La Serna y las proclamas del general Pedro Antonio de Olañeta al momento de su rebelión.

I. Pezuela en el Perú

Pezuela había sido nombrado subteniente del cuerpo de Artillería el 26 de diciembre de 1778, teniente en 1783 y pasó a ser capitán general del Real Cuerpo de Artillería en 1791 (5). A su llegada al Perú en 1805 ya había alcanzado el título de coronel de Infantería de dicho regimiento y al año siguiente ya era brigadier. Una de sus primeras medidas fue la creación de un parque de artillería en Lima, que levantó de la nada pero que llegó a ser el principal baluarte de defensa de la causa del rey que proveyó de instrumentos de guerra a todo el virreinato (IHMM, dto. 5591.25: 19). El nuevo cuartel de artillería se estableció en Santa Catalina y la escuela práctica se mantuvo en la capital en la Calera del Agustino, ocupándose además de construir una fábrica de pólvora (Pezuela, 2003: 11). En 1810, llegó a ser mariscal de Campo, gobernador militar y político de la plaza del Callao en 1814, general en jefe del ejército del Alto Perú y subinspector de las tropas en 1815, año en el que fue nombrado virrey y capitán general interino de los reinos del Perú, título que fue ratificado en 1816. De esta manera, desde su llegada al Perú, en once años logró ascender a todos los niveles y cargos que podía alcanzar un militar además de llegar a ser virrey y presidente de la Audiencia de Lima (6).

(3) Se eliminó la inquisición pero se mantuvieron los tribunales eclesiásticos, se abolió el sistema señorial pero se mantuvo el diezmo que favorecía a los señores, y los derechos feudales se convirtieron en títulos de propiedad.

(4) Agradezco la gentileza del Dr. Alfonso de Ceballos Escalera y Gila (Vizconde de Ayala y Marqués de la Floresta) por haberme proporcionado material inédito correspondiente a las reales cédulas otorgadas por el rey al Gral. Pezuela cuando fue nombrado virrey del Perú en 1817.

(5) Documento otorgado por Alfonso de Ceballos Escalera y Gila (Vizconde de Ayala y Marqués de la Floresta).

(6) Papeles privados de la familia Pezuela. Alfonso de Ceballos Escalera y Gila.

Ser virrey significaba cumplir funciones judiciales, administrativas y fiscales que iban desde proveer gobernaciones en nuevos descubrimientos, abrir caminos y hacer puentes, cumplir las reales cédulas dadas a sus antecesores referidas al buen servicio, hasta informarse sobre el tributo, moderarlo si fuere excesivo, perdonar y castigar delitos, no ocasionar gasto alguno a los pueblos por donde hiciere sus viajes y no permitir que el cabildo se excediera en sus gastos. Era la máxima autoridad del virreinato y además tenía injerencia sobre la Audiencia del Cusco y de Chile (7). Si bien la Constitución de Cádiz, que entró en vigencia en 1821, había suprimido el cargo de virrey sustituyéndolo por el de jefe político superior, no hubo en el Perú el nombramiento de un nuevo gobernante. Por lo tanto Pezuela seguía siendo la máxima autoridad en el virreinato. De manera que la insurrección acaecida por un grupo de militares el 29 de enero de 1821 fue una rebelión expresa contra el mando supremo.

Pezuela había tenido ya conflictos antes de ser nombrado virrey. Desde que tomó el mando en la conducción del ejército del Alto Perú en reemplazo del general Goyeneche en 1813 y hasta 1815, organizó un ejército cuyas tropas, además de estar disgustadas por el retiro del general Goyeneche, no estaban disciplinadas y tenían muy poca preparación (CDIP, t. XXVI). Llegado al Desaguadero y con tropas auxiliares de Lima consiguió formar un batallón con el nombre de “*Partidarios*” incorporando al mismo tiempo destacamentos sueltos y algunos oficiales que se hallaban en aquel lugar. Su idea era avanzar hasta Jujuy mientras que su segundo Ramírez lo haría hasta Tucumán. Pezuela pensaba que contaba con la plaza de Montevideo que estaba en manos de los realistas y cuyas tropas se desplazarían por el Paraná y juntándose con las de Tucumán ejercerían un efecto tenazas sobre Buenos Aires. Pero esto no sucedió debido a la caída de Montevideo en poder de los independentistas. Sin embargo, en su avance desde el norte, durante este período logró las victorias de Vilcapugio y Ayohuma (1813) sobre los independentistas que estaban al mando de Belgrano y posteriormente la de Viluma (1815) al mando de Rondeau (Pezuela, 2003: 12-13).

A pesar de las victorias, Navamuel (personaje contemporáneo de Pezuela que describe los sucesos en ese tiempo y hace un alegato en defensa del virrey) (8) refiere que había una tendencia más o menos activa y a favor de Buenos Aires en esa región del Alto Perú por lo que el ejército real se mantenía en desventaja y le era muy difícil cuando no imposible “(...) encontrar un solo punto de apoyo, ni abrigo en los pueblos y paisanaje, que por el contrario contribuían en este caso a su dispersión, al paso que los insurgentes tenían protección y recursos en sus retiradas”

(7) *Ibídem*.

(8) Este documento se encuentra en el Archivo Histórico Militar de Madrid bajo el número 5591.25.

(Archivo Histórico Militar de Madrid [AHMM], 5591.25: 27). Al mismo tiempo que se obtenían estas victorias, las conspiraciones en el Cusco y Arequipa complicaban la situación porque Pezuela se veía entre dos frentes con la inquietud de que le cerraran el paso y temía quedar atrapado entre ambos ejércitos, sin comunicación con Lima sin tener auxilio de parte alguna “(...) ni con qué mantener este Ejército de mi mando; y lo peor de todo, con cinco sextas partes de la fuerza de él, natales de las citadas Provincias del Cuzco, Puno y Arequipa (...)” (Pezuela, 1971: 282).

De modo que Pezuela, a un mismo tiempo debía enfrentar las acciones bélicas de los independentistas, la poca profesionalidad de las tropas a su mando, las conspiraciones en el mismo virreinato que bregaban por la ruptura con el poder real e incluso los curas, a quienes consideraba que eran los que más atacaban la causa del rey. En sus memorias dice lo siguiente:

“(...) los curas son los que más daño han causado a las armas del Rey, moviendo a todos en los púlpitos, y hasta en los confesionarios a que siguiesen el partido de la independencia, y a los indios a quienes ellos dominan los tenían prontos a su voz, y los levantaban cuando les convenían, ya para interceptar nuestros transportes de lo interior, y ya para llevar a los enemigos su artillería, municiones, carruajes, y cuanto necesitaban, sin más trabajo que pedir a los curas y caciques tres o cuatro mil indios” (Pezuela, 1971: 249).

Pezuela se encontraba en una de las situaciones más críticas y desesperadas que ha podido verse general alguno:

“(...) a su frente el enemigo, a su espalda el Cusco y todas las provincias interiores y por los costados un infierno de caudillos que aunque batidos y dispersos obraban contra él. Las divisiones de Velasco cerca de Cochabamba, Benavente en la Laguna, y Vaes en Sinti, obraban cada día con más tesón sin dejarle respirar” (IHCM, 5591.25: 38).

En estas circunstancias además debió hacer frente a los conflictos suscitados por el militar realista Saturnino Castro que sublevó el ejército contra sus jefes (IHCM, 5591.25: 39) y las desavenencias con el general La Serna que se acrecentaron cuando en 1815 este último pasó a dirigir el ejército del Alto Perú. En el mes de septiembre de 1816, cuando Pezuela ya había tomado posesión del cargo de Virrey, el general La Serna asumió la conducción del ejército del Alto Perú. Ambos generales disentían en cómo dirigir la guerra. La Serna, desoyendo las órdenes de Pezuela, avanzó hacia Tucumán, pero fue derrotado por las fuerzas de Güemes, “con sus gauchos armados con machete o sable corto toda gente montada muy diestra en el manejo del caballo” (IHCM, 5591.25: 39).

Otro frente en disputa había sido Chile, plaza que se perdió en 1818 por la acción de San Martín y las fuerzas de O'Higgins. En estas circunstancias las disputas con La Serna se acrecentaron. Pezuela pretendía la reconquista de Chile, porque lo consideraba indispensable para el mantenimiento del comercio, mientras que La Serna pensaba que no era lo principal para la conservación del Perú (9). A pesar de la pérdida de Chile, en 1819 Pezuela logró mantener contacto con los realistas chilenos al nombrar como su comisionado al caudillo de la Araucanía, Vicente Benavides, que lideraba las montoneras realistas en Chile. Según las instrucciones de Pezuela, el caudillo debía "evitar por todos los medios que el ejército preparado por el general San Martín avanzara hacia el Perú" (Manara, 2007/2008: 53-71).

Por lo tanto hasta 1820 Pezuela puso todo su esfuerzo en mantener inquebrantable la frontera sur. Pero los independentistas se hicieron fuertes en el mar, con la ayuda prestada por Inglaterra, situación que no puedo controlar, máxime cuando se perdieron las fragatas Prueba y Venganza.

El año 1820 fue un año particularmente crítico para el Perú, la rebelión de Riego en España imponía nuevamente el liberalismo y se restauraba la Constitución de 1812. San Martín llegaba a las costas del Perú con intención de acercarse a la capital, circunstancia que ponía en jaque a la población de Lima. Por otro lado, la economía y el sostenimiento del ejército eran desalentadores. En estas circunstancias y habiéndose creado una Junta de Arbitrios para obtener dinero, se impuso un empréstito por orden del virrey y se estableció la necesidad de reunir 117.000 pesos mensuales para el mantenimiento de las unidades militares (Pezuela, 1947: 763). La forma de obtenerlo fue a través del gremio mercantil que asumió esta obligación y además ofreció una serie de premios al ejército con la intención de obtener protección frente al posible ataque de la ciudad por parte de San Martín (Mazzeo, 2012: 179).

El 15 de septiembre de 1820 se proclamaba y juraba la Constitución por las autoridades eclesiásticas y los Tribunales y compañías de Caballería y Alabarderos. Pezuela refiere en sus memorias que no se oyeron vivas ni demostraciones de alegría, sino que parecía que el acto les era indiferente (Pezuela, 1947: 763). Sin embargo la Constitución fue acatada no solo por Pezuela sino también jurada a lo largo de todo el territorio peruano. En ese mismo tiempo por instancias del rey, Pezuela iniciaba las conversaciones con el general San Martín, las cuales, como es sabido, no llegaron a feliz término debido a que el virrey proponía que tanto "Chile como el ejército jurasen la Constitución y enviasen a las cortes los diputados que habrían de representar a aquel reino" (Mendiburu, 1931: 453). Si bien tanto Pezue-

(9) Oficio del general La Serna a Pezuela Nro. 37 en: *Índice y Cuaderno de copias de documentos justificativos* presentados por Pezuela. Archivo Histórico Militar de Madrid (AHCM).

la como la Serna, que llevó a cabo la segunda conversación en 1824 en Punchauca, eran partidarios de las mismas, la vía diplomática fue la gran apuesta del trienio liberal propiciando iniciativas de conciliación. Por su parte, los representantes del general San Martín respondieron que “ni los pueblos ni el ejército retrogradarían en su carrera de independencia pública” (M. Rianza, 2014: 103).

II. El levantamiento de Aznapuquio

Este levantamiento fue un golpe militar perpetrado en el seno del gobierno virreinal. El 28 de enero de 1821, un grupo de oficiales que conformaban la Junta Directiva de Guerra, reunidos en Aznapuquio y liderados por los generales José de Canterac, Jerónimo Valdez, el marqués de Valleumbroso, Mateo Ramírez, Manuel García Camba, José Ramón Rodil y otros, enviaban una carta al virrey Pezuela en la cual enumeraban las causas que los habían movilizado a tomar la determinación de destituirlo y entregar el mando al general La Serna (Albi, 2009: 317).

En este acto de insurrección se le imputaron a Pezuela muchos errores, cuyos descargos están contenidos en el manifiesto. Se le imputaron diez cargos, de los cuales los cinco primeros están referidos a temas militares: el primer cargo se refiere a imponer al general Quimper en Pisco para la defensa del puerto; el segundo se refiere a la actitud tomada frente al avance del general independentista Arenales, que dispuso el repliegue de los jefes realistas; en el tercero se le acusa de no defender Pasco y por el contrario retirar la división de vanguardia para evitar la reunión de Arenales con su ejército; el cuarto cargo se refiere a la desertión del batallón Numancia. Este batallón era una de las mejores unidades del ejército español en el Perú y abandonó las filas realistas para incorporarse al ejército Libertador en el valle de Huaura. Este episodio, singular y único en la historia de la emancipación americana se conoce como el “Paso del Numancia”. San Martín conocía la inclinación de muchos oficiales y tropa del Numancia por la independencia americana, principalmente a través de los informes secretos que le enviaba Riva Agüero. El paso del Numancia consternó a los realistas y el virrey decretó severísimas penas para los que, en el futuro, fueran tomados prisioneros. Así, uno de sus oficiales capturado fue pasado por las armas sin juicio alguno. Ante el reclamo de San Martín contra esta bárbara medida, Canterac contestó que el castigo era justo y merecido (Manrique Zago, 1989: 101-102). Frente a la desertión de dicho batallón, Pezuela declaró que tampoco Valdés, general en la vanguardia, había notado algo anormal en su comportamiento. En el quinto cargo se le acusa de haber dado licencia a muchos efectivos del ejército establecido en Lima, a lo cual Pezuela respondió que al disminuir los riesgos sobre la capital su intención fue aliviar las cargas públicas, las cuales eran muchas y el mantenimiento del ejército se hacía muy oneroso para la elite limeña.

Los tres siguientes cargos están referidos al tema económico: en el sexto se lo acusa de malversación de fondos, situación que debió haberle dolido dado que aportó dinero de su peculio para resolverlo, y en el séptimo se refiere a permitir el comercio de contrabando y ser tolerante con los ingleses, a lo cual respondió que si bien no veía con buenos ojos el comercio con extranjeros, las circunstancias le habían obligado a permitir banderas neutrales en los puertos del virreinato. En el octavo se le acusa de la diferencia de haberes en el seno del ejército. En cuanto a los dos últimos, se refiere a las personas que nombró para hacerse cargo tanto de Guayaquil como de Trujillo. En el noveno cargo se habla de haber nombrado a Pascual Vivero como gobernador de Guayaquil y a García del Barrio para mandar en aquella ciudad, y en el décimo de nombrar a Torre Tagle como gobernador de Trujillo. Respecto al primer nombramiento, Pezuela respondió que siempre había pedido consejo a varios militares, y en cuanto a Torre Tagle consideraba que habiendo sido nombrado intendente de la Paz por el rey y viendo que era poco idóneo en esa plaza decidió en compensación otorgarle la plaza de Trujillo cuando esta quedó vacante (10). En resumen, no se encuentra en estos cargos alusión a alguna de ofensa al rey o al gobierno español.

El oficio suscrito por el oficial del ejército reunido en Aznapuquio comentaba lo siguiente:

“(...) cuando las providencias del Gobierno que exigen un profundo silencio en las circunstancias actuales son sabidas del enemigo (...) rodeado de personas sospechadas (...) cuando ven próximo a una completa ruina del Virreinato y con él la América toda (...) cuando se ven dirigidos por un gobierno que carece de energía (...). Que no disfruta de ningún concepto en el ejército ni en los pueblos (...) si a la cabeza no se coloca un jefe que inspire confianza al ejército (...) y que salve esta nave del naufragio que la amenaza. Los que suscriben no ven otro medio (...) el que V. E. deposite en otras (manos) el gobierno que en las suyas está perdido. Estas son las del excelentísimo Sr. Don José de la Serna designado por la opinión del ejército y de los pueblos (...)” (11) (La Serna, 2010: 244).

Si bien el comunicado hace mención a los pueblos, este no fue consultado y respondió únicamente a un acto de rebelión en el ejército. En realidad se produjo un vacío de poder, porque La Serna no estaba dispuesto a tomar el mando, más bien

(10) Manifiesto del Virrey del Perú Don Joaquín de la Pezuela sobre los hechos y circunstancias de su separación del mando 1821.

(11) Oficio de los jefes del ejército Aznapuquio 29/1/1829, tomado de José de la Serna, último virrey español, 2010, p. 244.

quería el pasaporte para dirigirse a la Península dadas la “actuales circunstancias que hacían difícil el desempeño en el Virreinato (...)” (12) (La Serna, 2010: 245).

No hay en estas proclamas algo que conduzca a pensar que este acto de insurrección tuvo que ver con la “desobediencia debida”, fue más bien un acto de insurrección contra la autoridad virreinal. La historiografía no ha prestado demasiada atención a este hecho. La publicación del manifiesto por parte de Pezuela da cuenta de cuáles fueron los cargos que se le imputaron. En ningún momento hacen referencia a la Constitución o a la monarquía, sino que se refieren al manejo del virrey respecto a la política, el ejército y las finanzas del virreinato. En dicho documento Pezuela hace el descargo de cada uno de los hechos que, para él, son infundados. Adjunta al mismo tiempo una serie de cartas de distintos personajes que justifican y elogian su política llevada a cabo durante su mandato, tanto como militar como virrey. Un grupo de oficiales del Ejército Nacional del Alto Perú le escribieron en septiembre de 1821 desde Río de Janeiro, lugar donde se acantonaban las tropas realistas, comentando su pesar por su separación del gobierno que le había sido confiado por su majestad el rey, reconociéndolo como “fiel defensor de los sagrados derechos del Rey y del nación”. En otros documentos se evidencia la solidaridad con Pezuela de varias personalidades del gobierno, como el fiscal de la Audiencia del Cusco Bartolomé Bedoya, el Arzobispo de Lima, el brigadier Mariano Ricafort, el intendente de Arequipa Juan Bautista de Lavalle, el cirujano mayor del Ejército, el brigadier y coronel Manuel Monet, el regente de la Audiencia de Lima, don Tiburcio de Hermes, el regente de la Audiencia del Cusco, Manuel Pardo, el conde de Vallehermoso, el intendente de Lima Bartolomé María Salamanca, el comisario Antonio José de Cerdeña, el brigadier Manuel de Arredondo, y muchos otros más. Estos documentos de alguna manera acreditan que ni el pueblo de Lima, ni del Cusco ni el ejército tuvieron parte ni noticia de la rebelión o más bien del levantamiento de un puñado de militares revoltosos (AHMM, 5591, 25: 130).

III. La rebelión de Pedro Antonio de Olañeta

Desde 1822, el general Olañeta, que comandaba las fuerzas en el Alto Perú, consideraba a La Serna una “autoridad ilegítima”. En una entrevista entre el general Rudecindo Alvarado y Olañeta para pedirle que no enviara al rey los cautivos y que estos permanecieran en su poder, este declaraba: “está muy lejos de entregarlos a una autoridad ilegítima, contra los traidores liberales a quienes jamás uniría sus esfuerzos sino que, separado de ellos, se defendería en las provincias del Alto Perú, cuyo territorio pertenecía al rey de España” (La Serna, 2010: 373).

(12) *Ibidem*.

Olañeta fue capitán de Milicias en 1810 y gozaba de una excelente posición económica por su participación en el comercio y por su casamiento con Josefa Marquiegui, perteneciente a una ilustre familia de Salta (Bidondo, 1976: 214). Sus negocios se concentraron en el actual sur boliviano y el norte argentino, dedicado a la minería y al comercio cuando ingresó a la carrera de las armas no tenía entrenamiento militar. Se encontraba en un territorio donde las disputas entre los hombres de Buenos Aires y el Perú trataban de controlar la riqueza y el poder en Charcas. Estuvo bajo las órdenes de Goyeneche y participó en las derrotas imputadas a Castelli y Balcarce. A partir de 1812 fue nombrado gobernador y comandante militar en Salta, fue derrotado por Belgrano pero consiguió las victorias de Vilcapugio y Ayohuma. Fue el artífice de la defensa española en la región enfrentándose constantemente con los gauchos de Güemes. Si bien la guerra en la zona perjudicó parte de sus propiedades debido al constantemente tránsito de las tropas tanto independentista como del rey, supo sacar provecho de ello al pedir en varias oportunidades reclamos e indemnizaciones no solo por las suyas sino también por las de su suegro Marquiegui. Poseía además tierras dentro de la misión de San Ignacio de los Tobas, un ingenio minero donde se beneficiaba mineral procedente de Portugalete y Choroma y una finca situada en Santiago del Estero (Roca, 1997: 32-33).

En abril de 1817, ya brigadier, Olañeta se hizo cargo de una guarnición en Jujuy donde tenía a su familia y más tarde, cuando la expedición de San Martín desembarcó en Pisco, Olañeta se mantuvo en Tupiza, lugar donde ofreciendo varios indultos había logrado la pacificación de la región. Luego de la toma del poder por La Serna como nuevo Virrey, Olañeta desoyó las órdenes de este que le exigía mantenerse en el fuerte de Oruro y marchó hacia la provincia de Tarija (Mendiburu, 1934: 197). Sin embargo, en los partes enviados a La Serna el 24 de septiembre y el 16 y 28 de octubre de 1823, da cuenta de la acción bélica y de la actitud tomada por los oficiales y tropas a su mando, “quienes hicieron ver en todo momento que pertenecían a la heroica nación española” y por lo tanto debían ser premiados. Por otro lado, deja expresamente claro que las instrucciones recibidas se habían observado religiosamente, por lo que no muestra animadversión hacia la persona del virrey (13).

Para 1823 el gobierno liberal español comenzaba a hacer aguas. En España, en abril de ese año comenzó la invasión de los “cien mil hijos de San Luis”, expedición que se había preparado desde Francia contra el régimen liberal español. Ante esta situación, el rey se desplazó a Cádiz y cesó nuevamente la regencia provisional. El 1 de octubre de 1823 Fernando VII por segunda vez decretaba la abolición de la

(13) José de La Serna (1824). *Colección de los principales partes relativos a la campaña del Perú desde el 29 de enero de 1821 hasta 1824*. Estado Mayor General del Ejército, 1824.

Constitución. Tanto Julio Albi como Iñigo Moreno consideran que Olañeta se enteró de la abolición de la Constitución y el restablecimiento del absolutismo monárquico por los insurgentes de Buenos Aires, desde donde llegaban las noticias al Alto Perú mucho antes que a Lima. Este conocimiento sería lo que motivó a dicho general a rebelarse y el deseo de ponerse al mando del ejército y proclamarse jefe de las provincias de la Plata.

El 4 de febrero de 1824 Olañeta emitía un comunicado a los pueblos del Perú, en el que decía:

“(...) peruanos, tamaño favor le debéis a la providencia (...) que quiso ponerlos a la sobra de la división a mi mando (...) antes que fuese destruida por la facción de jefes conspirados (...). Mis soldados y yo trabajamos con heroico entusiasmo por la Religión, el Rey y por los derechos de la Nación española que tenemos el honor de pertenecer. Esta ha sido nuestra divisa y estos los únicos fines a que se dirigen mis connatos (...)” (AGM Madrid, dto. 5590.61) (14).

Y así fue, porque en defensa de la nación y el rey perdió toda su fortuna y la de su esposa. Olañeta había jurado la Constitución como todos los integrantes del ejército, pero debido a su disputa con La Serna y los jefes que lo secundaban encontró el momento propicio de rebelión cuando el rey declaraba la abolición de la misma. La Serna había propuesto al general Valdés como general en jefe del ejército del Sur, quedando de esa manera Olañeta bajo sus órdenes. Tenía conflictos con el general Maroto, quien había sido nombrado por La Serna presidente de Charcas, y con la Hera que estaba al mando del Potosí. Por lo tanto su disgusto con La Serna se acrecentaba día a día, solo faltaba el momento propicio para rebelarse (Mendiburu, 1934: 197-204).

Estos eran algunos de los tantos roces que existían entre los militares del ejército del Alto Perú. Al quedar abolida la Constitución cesaban todo lo aprobado durante el trienio liberal, lo que también incluía la derogación de los nombramientos de jefes militares que comandaban ejércitos en América (Fontana, 1983: 242). La situación se agravó luego de la capitulación de Ayacucho.

El 26 de diciembre de 1824 Pío Tristán le anunciaba desde Arequipa la capitulación de Ayacucho y su nombramiento como virrey del Perú, decisión que habían tomado todos los jefes reunidos en el Cusco en virtud de ser el general más antiguo del ejército español que aún permanecía libre. No obstante haber recibido un

(14) IHCM Documentación de la actuación de Olañeta al abolir la Constitución del Perú. Proclama del General Olañeta a los pueblos del Perú, Cuartel General en Potosí febrero 4 de 1824.

oficio del virrey en el que le ordenaba someterse como lo habían hecho los pueblos del Alto Perú, lo rechaza tajantemente y contesta en enero de 1825:

“(…) como buen español juré defender los derechos de S. M. en esta parte de la monarquía. Fiel a mis principios y a la causa del Rey, jamás faltaré a lo que una vez me obligué solemnemente. Por esto es que no puedo entrar en las capitulaciones celebradas entre el general Canterac y el del Ejército llamado Libertador” (Bidondo, 1976: 216).

En esa misma fecha, enero de 1825, Quintanilla desde Chiloé se ponía a su mando y le contestaba lo siguiente:

“El día 5 del presente recibí la desagradable noticia de la pérdida del ejército al mando del excelentísimo señor Virrey don José de la Serna, y que dicho señor, con algunos generales, jefes y oficiales y la escuadra, se dirigieron a la Península, quedando solo US. con el ejército de su mando en el Perú. Como se ha hablado tanto, con motivo de las desavenencias entre US. y dicho excelentísimo señor virrey, me veo en la precisión de que, faltando aquellas autoridades de quien dependía este Gobierno, someterme a la de US. Como debo, siempre que US., firme en los principios que no dudo le caracterizan, defienda con su ejército este territorio por el rey de España el señor Don Fernando VII, pues que de otro modo ni pudo ni debo someterme a otra autoridad que la que emane de su soberanía” (Paz Soldán, 1821: 274).

En la misma fecha Olañeta escribía a Pío Tristán desde Viacha en enero de 1825:

“(…) ya había leído las capitulaciones de Canterac y esos señores. Nada me sorprende de cuanto veo en ellas. (...) sus crímenes datan desde muy atrás, y en Quinua los han consumado. Yo por esto no desespero de la salud del Perú, cuando tengo ejército capaz de sostener la causa del rey mucho tiempo, mientras la Península apura los recursos y llegan las fuerzas que estaban para salir, según los papeles públicos de Buenos Aires (...). Los gabinetes de Europa quieren que la América pertenezca a la Península. La Inglaterra está indiferente, y yo pienso que todavía debo hacer el último esfuerzo, aun cuando todo el mundo se conjure contra mí. Así lograré confundir a mis enemigos personales y haré ver la deferencia que hay entre los fieles y los traidores” (Paz Soldán, 1821: 280).

Por lo tanto, Pedro Antonio de Olañeta, movido por el principio de desobediencia, se insubordinaba en defensa del rey y de sus territorios de ultramar. Su actitud puede ser interpretada como un acto de lealtad y defensa de la monarquía a la cual representaba. No estaba solo en esta actitud, dado que Quintanilla, el jefe militar

de Chiloé, lo secundaba, y Ramón Rodil, parapetado en los castillos del Callao, mantuvo la guarnición española hasta 1826.

La desobediencia de Olañeta fue interpretada por el general Bolívar, que había llegado al Perú el 1 de septiembre de 1823 y se encontraba en Pativilca, como una actitud a favor de la Independencia y no duda en enviarle una comunicación manifestándole su satisfacción por la determinación de “desprenderse del ocioso partido que ha oprimido a esta desgraciada parte del mundo”. Agrega además una frase elocuente en la que muestra que a los españoles los guiaba el interés de un grupo más que defender los derechos de España:

“Sí señor (el) general Laserna y sus asociados están muy distantes de oprimir a la América en beneficio de España ellos pretenden al Perú para entregarlo a la extinguida facción constitucional que ni supo defender su patrimonio o conciliar los intereses de la Europa con la América. (...) Ud. sabe que la constitución española es un monstruo de una forma indefinible, semejante al gobierno del gran turco aunque con apariencias enteramente opuestas. (...) Lo que (en) Constantinopla hace el gran señor, en Madrid lo ejecuta constitucionalmente una asamblea de infinitas cabezas tan absoluta en su voluntad como el primer déspota del mundo” (Biblioteca Nacional del Perú [BNP], dto. 2000024277).

Por último lo invita a asociarse a “la buena causa de la América”, para quien el verdadero obstáculo era la Constitución liberal implementada nuevamente en 1821, fecha en que llegada al Perú sería jurada por todos los soldados. Pero Olañeta tenía sus propios intereses que no coincidían con los de Bolívar. Quería mantener su dominio en la región de Charcas donde sus intereses económicos eran grandes. Como Roca “ellos (los españoles) pretendían regir una tierra que la sentían suya y no cabían los intrusos como La Serna y Maroto” (1997: 34). Olañeta quería el poder absoluto a nombre de su rey en la región.

Si bien la restauración de la Constitución liberal no cuajó en América y era impracticable debido a que la idea de imprimir al ejército una participación civil era imposible de sostener, la idea de la “desobediencia debida” se aplicó más allá de la Constitución y fue un hecho constante, no solo en el ejército realista sino también en el ejército republicano. En este sentido, los cambios en el ejército que pretendieron los liberales españoles nunca hubieran podido concebirse en América porque el mantenimiento de la obediencia y la disciplina en las filas militares fueron algunos de los grandes problemas que debieron afrontar los dirigentes. Se ha considerado que las constantes desertiones, de uno y otro bando, fueron el reflejo de la falta de profesionalización, la falta de espíritu de cuerpo y del sentido de unidad que no se superó con la simple incorporación de militares fogueados en

las guerras europeas; como sostiene R. Morea (2011) hubo que “negociar constantemente para mantener la unidad de la tropa” (15). Entonces una crisis institucional, desobediencia generalizada, disidencias y conflictos entre los altos mandos junto con tropas poco preparadas dieron el golpe final a la autoridad española en América y dejaron un vacío de poder que fue ocupado por aquellos hombres que tenían cierta preeminencia en la región.

IV. Corolario

La rebelión de Aznapuquio fue un levantamiento militar promovido por un grupo de oficiales que no estaban de acuerdo con las medidas tomadas por el virrey Pezuela. Fue una insurrección hecha contra la autoridad máxima y legítimamente constituida en el virreinato peruano nombrado por el Rey durante la restauración del absolutismo monárquico.

Olañeta se enfrentó a todos los españoles que capitularon, en defensa de la monarquía y del rey comprometiendo su vida y su fortuna en la contienda y por esa razón consideramos que se apropió de la desobediencia debida. Tenía en América 25 años y se enfrentaba a un grupo de españoles que habían llegado al Perú luego de la guerra contra Napoleón. Era la oficialidad joven que se enfrentaba con un militar de antigua data que se había fogueado en las tierras alta-peruanas y que no estaba dispuesto a abandonar así el poder. Bolívar entendió que su rebelión contra la Constitución lo acercaba a los ideales independentistas. Pero Olañeta jugaba su propio juego, el interés por la región de Charcas donde tenía intereses económicos y muchos años consolidando su poder. No pudo llevarlo a cabo porque el 2 de abril de 1825 moría en un enfrentamiento con las fuerzas independentistas en *Tumusla*.

Dos intentos de negociación, dos rebeliones en el seno del ejército español, un año y nueve meses de actividad organizativa del General San Martín no lograron consolidar la independencia del Perú, hubo que esperar cinco años más para que toda América quedase libre del poder español, por la acción del general Bolívar que llegó al Perú cuando San Martín ya había dejado el mando y partido hacia Chile.

A las instituciones liberales españolas les faltó hegemonía entre las fuerzas políticas y la organización militar. La desobediencia a las autoridades fue un acto

(15) El autor sostiene que la obediencia y la disciplina fueron los pilares sobre los cuales se intentó edificar la profesionalización del ejército, pero hubo dificultades por las cuales muchas veces los oficiales debieron negociar con sus subordinados.

que iba más allá de la decisión establecida en la Constitución, no se necesitaba esta para llevarla a cabo, pero sí se necesitaba para justificar dicha acción. La desobediencia dio lugar a la creación de una cultura de la insurrección, que se verá reflejada en la actitud de los caudillos militares luego de la independencia, para rebelarse unos contra otros, de ahí la importancia de encontrar un significado a dicha observación. En el interesante trabajo *Soldados de la República* de Carmen Mc Evoy se ve cómo luego del quiebre del sistema colonial, el país, que había quedado fragmentado y sin una autoridad pública, fue refundado por el ejército y no por el ciudadano. Son los pueblos armados los que se levantan bajo la conducción de un caudillo en defensa de la Constitución y la República. “El deber de todo patriota era ser un soldado de la República y ejercer aquello que se denominó ciudadanía armada” (Mc Evoy, 2010: 47). Eso quiso imponer España con el trienio liberal, pero fracasó.

Por otro lado, los constantes levantamientos que se produjeron en los primeros años independientes contaron con el apoyo indiscutible de las milicias cívicas, las cuales debieron sostener el orden y hacer la guerra frente al vacío dejado por el gobierno central. Los cuerpos cívicos, creados luego de la Independencia (16) (Montoya, 2002: 117-120) y las guardias nacionales recreadas por Agustín Gamarra a partir de 1840, conformadas por ciudadanos honrados para mantener el orden y la tranquilidad (Sobrevilla, 2007) son el mejor ejemplo del legado, en el Perú, de la militarización que se llevó a cabo con las guerras de independencia. Además, la desobediencia en el ejército fue el artífice mediante el cual un caudillo se sentía con la autoridad de rebelarse, tomando como bandera la defensa de la República y la Constitución.

V. Bibliografía

ALBI DE LA CUESTA, Julio (2009). *El último Virrey*. Madrid: Olleros y Ramos Editores.

ALJOVIN, Cristóbal (2000). *Caudillos y Constituciones, Perú 1825-1845*. Lima: FCE, PUCP, IRA.

BIDONDO, Emilio (1976). *La guerra de la Independencia del Norte Argentino*. Buenos Aires: Editorial Universitaria.

(16) Los cuerpos cívicos fueron creados por Bernardo de Monteagudo con fuerzas populares, pequeños propietarios, pequeños comerciantes, artesanos, castas y esclavos, que tenían por objetivo neutralizar a los realistas y generar el ánimo revolucionario.

BLANCO VALDES, Roberto (1988). *Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España Liberal, 1808-1823*. Madrid: Siglo XXI.

BORREGUERO BELTRÁN, Cristina (1994). "Nuevas perspectivas para la historia militar", en: *Revista española de Historia*, nro. 186, pp. 145-177.

CLAUSEWITZ, Carlos Von (2002). *De la Guerra*. Editado por Libro dot.com, Copyright <http://www.librodot.com>

FONTANA, Josep (1983). *La crisis del Antiguo Régimen 1808-1833*. Madrid: Editorial Crítica.

MANARA, Carla (2007/2008). "Las fronteras sur andinas como último enclave de la resistencia monárquica 1810-1832", en: *Revista de Historia*. Neuquén: Universidad Nacional del Comahue, Ed. Educo, Nro. 2, pp. 53-71.

MANRIQUE ZAGO (1989). *José de San Martín un camino hacia la libertad*. Buenos Aires: Editorial Manrique Zago.

MARTÍNEZ RIAZA, Ascensión y MORENO CEBRIAN, A. (2014). "La conciliación imposible. Las negociaciones entre españoles y americanos en la Independencia del Perú, 1820-1824", en: *La independencia incompleta, España y la "pérdida del Perú (1820-1824)*. Martínez Ríaza (ed.). Lima: IRA - PUCP.

MAZZEO, Cristina Ana (2012). *Gremios mercantiles en las guerras de independencia, Perú y México en la transición de la Colonia a la República*. Lima: BCRP - IEP.

MC EVOY, Carmen y RENIQUE, José Luis (2010). *Soldados de la República, guerra, correspondencia y memoria en el Perú (1830-1844)*. Lima: Fondo Editorial Congreso de la República.

MENDIBURU, Manuel de (1934). *Diccionario histórico biográfico del Perú*. Lima: Imprenta Gil.

MONTOYA, Gustavo (2002). *La Independencia del Perú y el fantasma de la revolución*. Lima: IEP, IFEA.

MOREA, Alejandro (2011). "El proceso de profesionalización del Ejército Auxiliar del Perú durante las guerras de independencia", en: *Quinto Sol*. Instituto de Estudios Socio-Históricos-Facultad de Ciencias Humanas. V. 15. N. 12. Disponible en: <http://www.fchst.unlpam.edu.ar/ojs/index.php/quintosol>

MORENO DE ARTEAGA, Iñigo (2010). *Marqués de la Serna, José de la Serna, último virrey español*. Astorga. León: Editorial Akron.

NAVAMUEL, Mariano Luis (s/f). *Compendio de Historia de la Revolución de la América del Sur*. Escrito por el Arcediano de Chile Mariano Luis Navamuel. Archivo Militar de Madrid. Reales Cédulas otorgadas por el rey al General Pezuela.

ORTEMBERG, Pablo y SOBREVILLA, Natalia (2011). *Compendio, Manifiesto en que el virrey del Perú Don Joaquín de la Pezuela*. Chile: Centro de Estudios Bicentenario.

PAZ SOLDÁN, Mariano Felipe (1919). *Historia del Perú independiente*. Madrid: América.

PEZUELA, Joaquín de la (1947). *Memoria de Gobierno*. Edición y prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Nro. XXVI.

PEZUELA, Joaquín de la (1971). "Memoria Militar del General Pezuela (1813 - 1815). Compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del Perú y sus provincias desde que el General Pezuela tomó el mando de él", en: *Colección Documental de la Independencia del Perú*. Memorias Diarios y Crónicas. Comisión Nacional del sesquicentenario de la Independencia. Perú. T. XXVI. VI.

SOBREVILLA, Natalia (2007). "Ciudadanos armados, las guardias nacionales en la construcción de la Nación en el Perú de mediados del siglo diecinueve", en: Chust Calero, Manuel and Marchena Fernández, Juan, eds. *Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850)*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, pp. 159-186.

VARGAS UGARTE, Rubén (1966). *Historia General del Perú*. Emancipación (1816-1825). Lima: Editorial Milla Batres, V. VI.

Otros documentos consultados

COLECCIÓN DOCUMENTAL DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ (1971). *Memorias, diarios y crónicas*. Volumen 4, Tomo XXVI. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú.

Archivos

AGN. Lima Archivo General de la Nación.

BNP. Biblioteca Nacional del Perú.

IHCM. Archivo General Militar de Madrid.